

13 de noviembre de 2008

Fuente: [La Jornada](#)

Nota de Lourdes Edith Rudiño

## Negocios de extranjeros vs tierra y agua para campesinos

La construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en Guerrero, se sostiene como plan firme a pesar de casi cinco años de confrontación entre las comunidades y ejidos dueños de la tierra por un lado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los gobiernos federal y estatal por el otro.

Lo que está en juego es mucho; desde la autoridad se observa el negocio, pues el proyecto, de grandes magnitudes, con cortinas con una altura de 162 metros, está previsto para construirse en cinco años e implicaría una inversión de mil 200 millones de dólares; participarían bancos extranjeros como el alemán Deutsche Bank y varios españoles, así como grandes constructoras y proveedores de maquinaria y equipo trasnacionales.

Desde los campesinos -cuatro comunidades, con Cacahuatpec como principal, 19 ejidos y una propiedad privada, la mayoría en el municipio de Acapulco—, la inundación prevista de 14 mil 213 hectáreas implicaría el desplazamiento de 25 mil personas, y también la desertificación y anulación de capacidad agrícola de poblados en las faldas del lugar que ocuparía la presa, lo cual dañaría a 75 mil personas.

Rodolfo Chávez Galindo, miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop), señaló en entrevista que, a diferencia de otros proyectos de presas, aquí hay una situación ejemplar por la organización y espíritu de lucha de los campesinos para impedir que los despojen de sus tierras.

Pero estos cinco años han sido de mucho desgaste económico y psicológico y de desgarramiento del tejido social de los pueblos, la CFE ha "maiceado" a los comisariados de los núcleos agrarios y ha provocado conflictos internos, incluso intrafamiliares, pues algunos por momentos están de acuerdo en que se haga la presa,

pretenden recibir dinero por sus tierras y se pelean con la mayoría opositora.

¿Cómo empezó todo? En enero-julio de 2003, sin avisar, sin pedir permiso de los campesinos, sin que hubiera un decreto de expropiación –como no lo hay ahora mismo–, la CFE hizo trabajos propios para la presa (tiró miles de árboles, excavó para desviar el río, instaló un campamento para guardar dinamita y llevó decenas de computadoras). Cuando al fin los campesinos fueron informados por la CFE que allí instalaría una presa y que “ustedes no pueden hacer nada pues esto es un asunto federal”, replicaron: “será todo eso, pero esta tierra es mía (...) y allí el 28 de julio empezó nuestro movimiento” social.

Para cumplir en fachada un requisito de la Ley Agraria, entre 2004 y 2005, relató Chávez, la CFE promovió asambleas ejidales y comunales amañadas para conseguir el aval campesino a la presa. Hubo ocasiones en que personas muertas o emigradas pasaron lista; otras en que se impidió el acceso a los opositores declarados al proyecto, y una más donde mujeres y niños fueron encañonados por cientos de policías que “resguardaban” una asamblea de Cacahuatpec. Además estas asambleas se hicieron con violaciones claras a la ley: fuera de los núcleos agrarios, incluso de sus municipios, y en lugares muy lejanos; sin quórum, y sin pase de lista. Y hubo allí casos de enfrentamiento con extrema tensión donde “hemos visto riesgos de Atencazos o Oaxacazos”.

Asambleas nulas y postura internacional. El tribunal agrario 41 de Acapulco recibió las denuncias campesinas y eran tan evidentes las violaciones, que decidió echar abajo todas esas asambleas, todas y cada una.

A ello se suma que la CFE está demandada penalmente y por daños ambientales, y una reacción internacional impresionante: el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) tomó nota del caso en 2006 y determinó que la presa no beneficiaría en nada a las comunidades y que las autoridades están violando sus propias leyes (las agrarias) por lo cual debe “cancelarse” el proyecto; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deliberó sobre el caso en Ginebra y concluyó que el gobierno mexicano debe respetar los derechos de los indígenas y campesinos sobre sus tierras. Los relatores de Vivienda, Asuntos Indígenas y de Agricultura de la ONU emitieron un pronunciamiento en sentido similar, la directora de Amnistía Internacional y la Alta Comisionada de Derechos Humanos han dado también la razón a los opositores de La Parota.

Decisiones claras. Rodolfo Chávez comenta que la férrea decisión campesina de defender sus tierras se hizo muy explícita en una asamblea de Cacahuatán el 12 de agosto de 2007 –que resultó legal para todos, pues fue convocada tanto por el comisariado legítimo como por otro espurio que apoya la presa–; allí representantes de la CFE hablaron del proyecto y también lo hicieron expertos en temas de agua, presas, energía y comunidad, convocados por el CECOP. “Como se determinó que la asamblea sería por usos y costumbres, se dijo que allí Cacahuatán debería tomar decisiones, y la gran sorpresa fue que todos, unos 3 mil 500 opositores y 800 que antes habían sido afines a la presa, votaron en contra del proyecto (...) Esto es lo que estamos diciendo desde entonces en todos los foros y nuestra gran demanda es que se cancele el proyecto”.

A pesar de todo lo transcurrido, y de que los campesinos tienen cuatro amparos para frenar el acceso de la CFE a la zona, técnicos de esta paraestatal y de otras instancias gubernamentales siguen haciéndose presentes –empezaron a construir carreteras, los frenamos, y ahorita pretenden hacer una del poblado de San Isidro Gallinero a Concepción, para allí pasar a Las Parotas, donde quieren construir la cortina.

“Y a cada rato buscan entrar en los ejidos de Los Arroyos y los Huajes, y dicen que la presa va. Que ni siquiera tendría que haber más asambleas, porque el gobierno tiene derecho a expropiar. Eso crea mucha tensión en la gente.”

La obcecación por la presa no tiene una justificación social, comentó Chávez. Oficialmente se dijo primero que la obra supliría necesidades de energía de Acapulco, “cuando ésta es la ciudad más iluminada del país”, luego se afirmó que sería para Guerrero, después que para el sur de la República y luego que sería para el centro. “O sea, nunca han dicho la verdad. En la asamblea del 12 de agosto, la gente que sabe de energía nos informó que en México hay un excedente de 48 por ciento de capacidad instalada de generación eléctrica –que sirve de apoyo ante contingencias, y ello supera el 27 por ciento de la media global–. La intención real, la hemos escuchado en Guatemala. Lo que fue el Plan Puebla Panamá y que ahora se llama Proyecto Mesoamericano, tiene programadas más de 300 presas de aquí a Panamá y se busca generar un gigantesco mercado de energía eléctrica, no para la región, sino para Estados Unidos, en particular para Texas y California. O sea grandes planes que se llevan entre las patas a quien se les pone en frente. ¿Dónde están los derechos humanos?”